

AGENDA CIUDADANA

ENTRE UNA POLITICA FALLIDA Y UNA SOCIEDAD CIVIL INCIPIENTE

Lorenzo Meyer

¿Son, los Nuestros, los Tiempos de Yeats? Como todo gran poema, el escrito a inicios del siglo XX por el premio Nóbel irlandés, William Yeats, es realmente atemporal. Así, la interpretación que el autor dio a otro tiempo, pareciera venirle muy bien al nuestro: “Vuelta y vuelta en un giro cada vez mayor/el halcón ya no puede oír al cetrero/ todo se viene abajo; el centro ya no sostiene/ la anarquía se desparrama sobre el mundo/ la ola teñida de sangre se desparrama, y en todas partes/ la ceremonia de la inocencia se ahoga/los mejores carecen de toda convicción, en tanto que los peores están llenos de una apasionada intensidad”.

Afortunadamente para nosotros, la parte más trágica del presente no está teniendo lugar dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, lo nuestro, el actual momento mexicano también tiene elementos de tragedia, sino por otra cosa, por el tiempo y las oportunidades perdidas por los millones que consumen su vida en la pobreza, la mediocridad de la falta de oportunidades y perspectivas, de la vida siempre a merced de la necesidad.

Con la perspectiva que ofrece la distancia, queda claro que México no hubiera podido ser esa gran nación que por un lapso breve llegaron a imaginar los optimistas y exaltados patriotas de 1821, cuando una sociedad colonial supuestamente muy rica, muy vasta pero también muy dividida y con apenas seis millones de habitantes, se disponía a constituirse en país. Sin embargo, también es evidente que México hubiera podido ser algo mucho mejor de lo que finalmente fue. Y es que el país que tenemos ahora ha estado dando tumbos por el último cuarto de siglo, desde que tuvo lugar el desastre económico de 1982 – desastre que es de la exclusiva responsabilidad de la clase dirigente— y simplemente no

encuentra aún la manera de recuperar el sentido de dirección y de propósito que alguna vez llegó a tener.

Oportunidad Perdida.- El cambio político que tuvo lugar en México como resultado de la elección del año 2000, encerraba el potencial de la gran oportunidad histórica. Era evidente entonces que desde mediados del siglo XX se había acumulado ya una gran energía social –especialmente en sus clases medias, pero no exclusivamente en ellas-- que no había podido ser bien encausada por la ausencia de democracia, el control corporativo y la represión selectiva pero eficaz del autoritarismo posrevolucionario, habían actuado como elementos desalentadores de un avance modernizador.

Desde la estabilidad interna y la del entorno externo inmediato, alcanzadas tras el fin de la II Guerra Mundial, se dieron en nuestro país las condiciones para permitir que se hubieran combinando un progreso material –el “milagro mexicano” de entonces— con lo que podría haber sido un progreso moral, que dada la naturaleza de los tiempos, hubiera implicado, entre otras cosas, democratización política, transformación en las estructuras de procuración de justicia, equidad en la distribución de los beneficios del proceso productivo y búsqueda del mejor rumbo para mantener la independencia relativa heredada de la Revolución Mexicana. Sin embargo, una y otra vez, los esfuerzos hechos desde la derecha – los del PAN, por ejemplo--, desde el centro –el henriquismo, el navismo— o la izquierda – las luchas obreras y agrarias o el movimiento del 68— fueron derrotados por los beneficiados por el *status quo*.

Pese a los esfuerzos en contra de los Gustavo Díaz Ordaz o Carlos Salinas, la rueda de la historia finalmente le dio la oportunidad a unos de los que se decían comprometidos con el cambio, la democracia y la justicia. Desafortunadamente, los fallos en el talento o en la fibra moral, o en ambos, de quienes asumieron la gran responsabilidad del cambio,

hicieron que del “parto de los montes” del 2000 saliera apenas un tímido ratón. La oportunidad histórica se desperdició, al menos hasta ahora.

La Política Como Triunfo del Absurdo.- A cinco años de la expulsión del PRI de “Los Pinos”, la política mexicana difícilmente se puede interpretar como la catapulta que impulse el gran salto histórico de México, sino como cadena bien eslabonada de corrupciones y absurdos que mantienen paralizado al país. Así, hoy aparece como algo casi natural que en el arranque de la democracia, el partido más votado sea justamente el que posee una naturaleza histórica antidemocrática y cuya biografía es un relato interminable de corrupción. Pese al cambio, quienes fueron máximos responsables de crímenes de Estado o de fraude electoral masivo –Luis Echeverría y Miguel de la Madrid, respectivamente— siguen disfrutando de servicios de protección vitalicia y de una jugosa pensión, mientras que el ciudadano común y corriente –el supuesto beneficiario del cambio-- vive a merced de una criminalidad que ya dejó de temerle al Estado. La economía pone a ese ciudadano a merced de las fuerzas brutales del mercado pero sin siquiera abrirle, como en China, las posibilidades del crecimiento. Esa economía ya ha permanecido estancada por casi un cuarto de siglo pero la clase política ha hecho que el financiamiento público a sus partidos --despreciados por la opinión pública, según las encuestas— vaya a ser de 6 mil millones de pesos el año entrante. En fin, la lista de absurdos puede seguir —ante la debilidad de “Los Pinos”, la casa de Carlos Salinas es el sitio donde se intentan forjar los grandes acuerdos nacionales; los costosísimos IFE y TEPJF no pueden impedir que en su interior se reflejen las disputas partidistas justo en vísperas del arranque del gran proceso electoral; las cárceles resultan ser eficientes oficinas ejecutivas del crimen organizado--, pero tiene más sentido fijar la atención en una de sus más notables consecuencias.

La Política no Puede Dejarse en Manos de los Políticos.- La política como cadena de absurdos e ineficiencias hace tiempo que acabó con la paciencia de muchos, pero pocos son los que hoy tienen la posibilidad de hacer algo al respecto. Entre esos pocos se encuentran los hombres del gran dinero, en particular uno de ellos: Carlos Slim, catalogado como el cuarto hombre más rico del mundo. Y Slim, en compañía de otras grandes fortunas – cuantiosas en un país donde la mitad de sus habitantes están catalogados como pobres, pero secundarias en comparación con la de la familia Slim— decidió que si bien la solución al desorden y la ineficiencia no está en tomar directamente las riendas de la política al estilo Berlusconi, en Italia, es ya necesario dejar en claro que la política es un asunto tan delicado para la economía que no puede seguirse dejando exclusiva ni primordialmente en manos de políticos que han probado de manera fehaciente su incompetencia e irresponsabilidad.

El primer paso que han dado los “grandes capitanes del capital” para meter al orden a toda la clase política en el momento en que arranca la sucesión de Vicente Fox, es la redacción de una especie de cartilla y lograr que un Premio Nóbel –Mario Molina— la leyera en público. Se trata del “Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo y el Empleo”. En principio no hay nada particularmente novedoso y si mucho de sentido común en ese documento de 12 cuartillas presentado el 29 de septiembre en el Alcázar de Chapultepec. Se trata de una propuesta para aprovechar los “tiempos excepcionales” por los que atraviesa México, enfocando la actividad colectiva hacia cinco objetivos –Estado de Derecho y seguridad pública, desarrollo con justicia, es decir, crecimiento económico y empleo; formación y desarrollo del capital humano y social; desarrollo del capital físico y reforma de la administración pública. Con tal fin, se demandan cuarenta acciones que, en los términos en que fueron presentadas, resultan aceptables para casi todos, como son: garantías de seguridad frente al embate de la

criminalidad, juicios orales, racionalizar el calendario electoral, lograr una política fiscal estable, fortalecer el ahorro interno, aumentar los recursos para la ciencia y la tecnología, optimizar el aprovechamiento del agua, dar autonomía de gestión a las empresas públicas, desarrollar el capital físico, etcétera.

En realidad, lo importante del acuerdo es su simbolismo. Desde las alturas del poder económico –acompañado o arropado por personajes conocidos en el mundo intelectual, del espectáculo o de la información--, se exige a los partidos y a sus candidatos un compromiso con los lineamientos generales de un “proyecto nacional” y, sobre todo, el respeto a los procedimientos y resultados de la contienda electoral en circunstancias en que los árbitros oficiales no son ya de entera confianza ni muestran la capacidad que alguna vez tuvieron. El acuerdo lleva dientes –por ahora, también simbólicos— en la forma de una comisión que, se supone, buscará que el comportamiento de la clase política se mantenga dentro del marco establecido por el “Acuerdo de Chapultepec”.

Hasta el momento, todos los posibles candidatos presidenciales dijeron estar enteramente de acuerdo con estos lineamientos generales, aunque uno de ellos –precisamente el puntero, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)— puso condiciones. Para que el arnés manufacturado en Chapultepec le deje una libertad relativa de movimiento y sea compatible con su propio proyecto. AMLO pidió que el acuerdo también contenga de manera explícita un compromiso para el combate a la pobreza –el documento apenas dedica un par de renglones al tema-- y a la corrupción, además de comprometerse a no privatizar las industrias petrolera y eléctrica.

Implicaciones.– Lo leído por Mario Molina pero de autoría hasta ahora anónima, se presenta como una exigencia de la sociedad civil. En estricto sentido, los trescientos que firmaron el acuerdo en el alcázar son sólo parte de la sociedad civil mexicana, una sociedad

que apenas empieza a desarrollarse. Hablar hoy y aquí en nombre de la sociedad civil, es algo problemático, pues dicha sociedad casi no existe, la mayoría de los mexicanos están fuera de ella. En Chapultepec se habló, básicamente, en nombre de lo que sí existe: la organización del gran capital. En si mismo, eso no tiene nada de malo, sobre todo porque las propuestas son, en principio, muy razonables y aceptables. Pero hay que dejar bien claro que, por ahora, la sociedad civil mexicana es muy limitado, se trata más de una posibilidad que de una realidad.

Una implicación de la reunión en Chapultepec, combinada con el informe del 1° de septiembre –donde quedó claro que el presidente no tiene más agenda que administrar lo mejor que pueda el tiempo que le queda— y con la creciente desarticulación del gabinete, es que el gobierno federal en su conjunto ya perdió definitivamente la iniciativa. En realidad, esa pérdida ocurrió hace buen tiempo, pero es ahora cuando un actor muy poderoso y legítimo ha salido abiertamente a la arena pública para, a la vista de todos, intentar llenar el vacío que produce la falta de liderazgo presidencial. Este actor –podemos llamarlo “grupo Chapultepec” pero también “grupo Slim”— tiene por objetivo minimizar los evidentes peligros que surgen de la combinación de la inevitable “incertidumbre democrática” –algo realmente novedoso en la historia política mexicana— con el desplome adelantado de la presidencia de Fox. Aquí no se trata de evitar ese posible pero al fin inexistente “choque de trenes” que se temió en 1994, y que fue el origen del “grupo San Ángel”, sino de evitar el descarrilamiento del tren nacional-democrático en que vamos todos.

En fin, hoy, la tarea es devolverle o darle un sentido social a la política mexicana y para ello hay que institucionalizar el diálogo permanente de la ciudadanía con la clase política. Se necesita la organización desde abajo y desde fuera de los partidos, es decir,

hacer realidad a la famosa sociedad civil. Para que tal sociedad sea lo que debe ser, necesita extenderse más allá del alcázar de Chapultepec, pues de lo contrario el esfuerzo podría desembocar en una democracia oligárquica, y esa no es una verdadera solución a nuestro problema histórico.